

INSTRUCCIÓN Nº 1/2012 DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
SOBRE COORDINACIÓN ENTRE ORGANOS DE LA JURISDICCIÓN
PENAL

INTRODUCCION

El Art. 16.h del R.D. 1608/2005, de 30 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, otorga a los Secretarios de Gobierno la competencia para cursar instrucciones de servicio como instrumento fundamental para homogeneizar conductas y establecer pautas de actuación uniformes en todos los órganos judiciales.

La presente instrucción tiene como objetivo la coordinación de actuaciones entre los diferentes órganos jurisdiccionales con competencia en materia penal.

La jurisdicción penal española atribuye a diferentes órganos las funciones de instrucción y la juzgadora. Ello supone que la competencia funcional se distribuye en razón de las diferentes fases procesales entre los Juzgados de Instrucción, Juzgados de lo Penal y Audiencia Provincial.

Todo ello, implica una adecuada coordinación entre las diferentes Oficinas Judiciales que intervienen en la tramitación procesal, de forma que se asegure un traspaso correcto no solo de los expedientes sino de cualquier pieza, documento, objeto o cantidad intervenida que esté relacionado con el procedimiento penal.

Lo mismo puede decirse de las comparecencias apud-acta del imputado (Art.530 LECr.) ante el Juzgado instructor cuando el procedimiento ya no se halla en el mismo, sino en el órgano enjuiciador o se comunica un cambio de domicilio al Juzgado de Instrucción por parte del imputado, cuando se debería comunicar al órgano enjuiciador.

Son múltiples, pues, los aspectos en los que se debe establecer un protocolo de actuación que garantice la coordinación entre las diferentes oficinas judiciales con competencia en la tramitación de los procedimientos penales, de forma que se garantice una mayor eficacia y coordinación entre las mismas, sin que ello suponga una sobrecarga de trabajo.

Estos criterios son también de aplicación a los supuestos de inhibición entre Juzgados (Arts 22 y ss L.E.Criminal).

Tomando en consideración los anteriores argumentos y a petición de los Sres. Secretarios Judiciales destinados en los órganos judiciales con competencia en el orden penal, se dicta la presente instrucción.

1.- Destinatarios de la Instrucción.

La presente instrucción va dirigida a los Secretarios Judiciales destinados en órganos de la Jurisdicción Penal de esta Comunidad; Juzgados de Instrucción, Juzgado de Violencia sobre la mujer, Juzgados de lo Penal y Audiencia Provincial.

Los Secretarios Judiciales deberán difundirla entre los funcionarios a quienes dirigen, a fin de asegurar el correcto cumplimiento de la misma.

2.- Pautas relativas al registro de asuntos.

En este punto los Secretarios Judiciales deberán asegurarse de que se introduzcan la totalidad de los datos que al efecto exija la aplicación informática, como mínimo los relativos a la correcta identificación y aquellos que permitan una rápida localización de todas las partes intervinientes en el proceso, de sus representantes y defensores, así como los relativos a testigos y a la oficina judicial.

Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción nº 4/2009, del Secretario General de la Administración de Justicia, de fecha 3 de Julio de 2009; Reglamento 2/2010, de 25 de Febrero del Consejo General del Poder Judicial y Circular nº 1/2012, de fecha 19 de Junio de 2012 dictada por esta Secretaria de Gobierno.

3.- Pautas relativas a las anotaciones en el sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia.

En este punto solo cabe indicar el cumplimiento de lo dispuesto en el R.D.95/2009, de 6 de febrero, modificado por el R.D. 164/2011 de 4 de Noviembre, por el que se regula el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, así como de la Instrucción 5/2010 dictada por el Secretario General de la Administración de Justicia de fecha 2 de Junio de 2010.

Especial referencia cabe hacer a lo dispuesto en el Art. 11 del Real Decreto que impone al Secretario Judicial la obligación de verificar la exactitud del contenido de la información,

previamente cumplimentada por el personal de la oficina bajo su dirección y la transmisión de los datos en los plazos señalados.

En consecuencia, los Secretarios deberán evitar la remisión de actuaciones a otro Juzgado o Tribunal sin haber practicado las anotaciones que correspondan en los Registros Centrales. Así como las cancelaciones de procedimientos, y de manera especial las cancelaciones de medidas cautelares en cuanto estas se dejen sin efecto.

Pudiendo devolverse al órgano instructor o enjuiciador los procedimientos en los que no consten realizadas dichas anotaciones.

4.- Pautas relativas al tratamiento de las piezas de convicción.

Cuando un procedimiento penal sea remitido a otro Juzgado o Tribunal, ya sea por inhibición o por razón de competencia funcional, en el último folio se hará constar por diligencia del Secretario la existencia o no de piezas de convicción, así como una relación detallada de las mismas.

Dichas piezas deberán ser remitidas conjuntamente con el procedimiento, si se encuentran en los archivos del Juzgado. Si por la naturaleza o el volumen de las mismas no pueden ser remitidas directamente, se hará constar el lugar donde se encuentran depositadas y a disposición del órgano competente.

Una vez recibido el procedimiento por el órgano que debe continuar la tramitación, el Secretario Judicial del mismo deberá comprobar si existe concordancia entre lo recibido y lo que consta en la diligencia de remisión de las piezas. Seguidamente, procederá a incluirlas en el libro de registro correspondiente, previa comprobación del estado de conservación y dejando constancia de cualquier deterioro o anomalía que se observe.

Si las piezas recibidas no coinciden con lo que consta en la diligencia de remisión, se hará constar la discordancia y se oficiará al órgano remitente para averiguar el motivo, dejando constancia en el procedimiento del resultado de las gestiones.

Recordar en este punto que la aplicación Banesto incluye la versión 10.0 que proporciona a los órganos judiciales que así lo soliciten, siempre que en su localidad no exista un Servicio Central de Archivo y Depósitos legalmente constituido, un servicio que asegure el adecuado depósito y conservación de las piezas de convicción.

5.- Pautas relativas a la gestión de cantidades intervenidas o depositadas.

Al igual que con las piezas de convicción, se hará constar en las actuaciones, si existe alguna cantidad de dinero intervenida o depositada en el procedimiento, debiendo hacer referencia al folio concreto de las actuaciones en el que consta el resguardo acreditativo de ingreso en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones.

Una vez recibido el procedimiento en el órgano competente para enjuiciamiento, el Secretario Judicial del mismo procederá a reclamar la transferencia a la Cuenta de Consignaciones de su Oficina Judicial, facilitando el nº de cuenta y los datos del procedimiento al Secretario Judicial del órgano remitente.

6.- Pautas relativas a la tramitación de las Piezas.

Igualmente los Secretarios Judiciales de los órganos de instrucción deberán remitir las piezas separadas relativas a la responsabilidad civil y embargo (Art. 590 L.E.Cr.). Estas piezas deberán ser remitidas junto al procedimiento penal debidamente concluidas y en su caso, a la mayor brevedad, indicando el trámite pendiente por el que quedan a disposición del instructor. Asimismo deberán ser transferidas las cantidades ingresadas en concepto de fianza o embargo, debiendo facilitar el órgano receptor los datos para la efectividad de dichos ingresos.

7.- Pautas relativas al foliado de las actuaciones.

Los Secretarios Judiciales deberán adoptar las medidas oportunas para que ningún procedimiento sea remitido a otra oficina judicial sin que las actuaciones principales y las piezas derivadas de la misma estén debidamente foliadas. A tal efecto, en el último folio del procedimiento deberá hacerse constar el número total de folios que componen las actuaciones, y, en su caso los tomos que las integran, si hubiera más de uno.

8.- Pautas relativas a los acuses de recibo.

El Secretario Judicial del órgano destinatario deberá acusar recibo del procedimiento de manera inmediata, o en su caso devolver copia del oficio de remisión en el que conste el sello de entrada y fecha en que el procedimiento se ha recibido en su oficina. Todo ello, sin perjuicio, de que aceptado el procedimiento por el Juzgado de lo Penal o Audiencia Provincial, puede comprobarse el número dado al mismo a través del sistema de gestión Minerva NOJ.

En un plazo no superior a tres días desde la recepción del expediente se solicitará, por el órgano enjuiciador, la remisión de las piezas de situación y responsabilidad civil, debidamente concluidas, de los objetos y efectos intervenidos y la

transferencia de las cantidades ocupadas o ingresadas por razón del procedimiento.

El Secretario Judicial del órgano remitente adoptará las medidas necesarias para que se efectúen las debidas anotaciones en el sistema de gestión procesal.

Cualquier documento que se remita con posterioridad al órgano enjuiciador irá acompañado de oficio en el que se indicará la referencia del procedimiento, fecha de remisión y cuantos datos identificadores sean necesarios, evitando que dichos datos se adjunten en hojas adhesivas.

9.- Pautas para promover los pagos mediante transferencias a cuenta bancaria del beneficiario.

Recordar expresamente lo dispuesto en el art. 12.4 del R.D. 467/2006 que establece. *"En aquellos supuestos en que el beneficiario del reintegro de cantidad resida en distinto municipio a aquel en que estuviese la sede del órgano emisor, el Secretario judicial utilizará la transferencia a la cuenta bancaria no judicial"*.

En consecuencia cuando el beneficiario no resida en la ciudad donde se encuentra la sede del órgano judicial, los Secretarios Judiciales deberán requerirle para que facilite los datos relativos a una cuenta de su titularidad, asimismo deberá informarse a los perjudicados del carácter público, en general, de las actuaciones judiciales, y de que el número de cuenta facilitado queda incorporado al expediente, tal y como establece el citado Real Decreto.

Estos mandamientos se ejecutan de manera telemática por la entidad bancaria adjudicataria, no siendo preciso la remisión de los mismos en soporte papel.

Cuando la orden de transferencia sea al extranjero, se deberá imprimir mandamiento de pago, firmado y sellado y remitirlo a la oficina bancaria. De la misma manera se procederá para la ejecución de mandamientos de transferencia en divisa.

10.- Especialidades en materia de Juicios Rápidos

1. Requerimientos para iniciar la ejecución de penas.

El requerimiento, como acto de comunicación mediante el cual se exige de la persona condenada una determinada conducta, activa o pasiva, es el acto con el cual se da inicio a la ejecución de la pena o las penas impuestas, debiendo practicarse dichos requerimientos por el Juzgado de Guardia por expresa atribución legal, Art. 801.4 LECr.

Es fundamental, por ello, indicar de manera clara y terminante a la persona condenada, la actuación que de ella se espera para colaborar en la correcta ejecución de la pena impuesta, así como advertirle de forma expresa sobre las consecuencias que debería afrontar en el supuesto de que quebrantara la condena impuesta. Resulta asimismo imprescindible que conste **el domicilio y número de teléfono actualizado del penado, haciéndole saber la obligación de comunicar los cambios de domicilio**. No puede, por ello, ser suficiente con la redacción de requerimientos globales o genéricos. En consecuencia, deberán realizarse tales requerimientos atendiendo a los criterios siguientes:

1. Cada pena impuesta deberá ser objeto de un requerimiento individual expreso.

2. El requerimiento deberá contener la intimación a seguir la conducta positiva o la abstención que sea precisa para dar inicio a la ejecución de la pena por parte de la persona condenada, detallando el contenido de dicha conducta cuyo cumplimiento se le exige.

3. El requerimiento deberá, además, contener el apercibimiento de la responsabilidad que contraería la persona condenada en el caso de quebrantar la condena.

4. La diligencia de requerimiento expresará, necesariamente, que la persona condenada queda enterada de su contenido, y de los apercibimientos realizados.

5. Si se trata de una pena sustitutiva, se advertirá expresamente a la persona condenada que el incumplimiento, total o parcial, de la pena sustitutiva, supondrá el cumplimiento de la pena originaria.

6. Se consignará, en su caso la respuesta por parte de la persona condenada.

7. Se entregará en todo caso a la persona condenada una copia del requerimiento.

8. Supuestos específicos:

a. Multas y responsabilidades civiles:

Dado que, en el momento de hacer el requerimiento, se desconoce cual va a ser el órgano judicial encargado de continuar la ejecución, el requerimiento se deberá limitar a ordenar a la persona condenada el abono del importe de la multa y/o de la responsabilidad civil en la cuenta de consignaciones cuyo número le será indicado más adelante por

el órgano judicial que prosiga la ejecución, en el domicilio aportado por el penado.

No obstante, si el penado manifestara su intención de pago inmediato, se le facilitará el número de la cuenta de consignaciones del Juzgado Instructor, debiendo el Secretario Judicial efectuar la transferencia al Juzgado de lo Penal tan pronto tenga conocimiento del Juzgado destinatario y de la ejecutoria abierta. En todo caso el requerimiento se practicará bajo apercibimiento de que, en caso de impago se procederá por vía de apremio, y en el caso de las multas, de la responsabilidad personal subsidiaria del Art. 53 C. Penal.

En caso de solicitar fraccionamiento del pago de la multa o de la responsabilidad civil (Arts. 50.6 y 125 C. Penal), de no haberse resuelto tal cuestión en Sentencia, se remitirá al penado a la decisión que por el Juzgado Ejecutor se tome una vez conocido el Juzgado competente y la ejecutoria abierta y que le será notificada en el domicilio aportado a efectos de notificaciones y comunicaciones, quedando en todo caso requerido bajo apercibimiento de apremio y/o de incurrir en responsabilidad personal por impago de multa.

b. Privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores:

Se hará constar, expresamente, si el permiso de conducir se hallaba ya intervenido, como medida cautelar, o si, de acuerdo con el artículo 794.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se procede a su retirada en ese momento. En los casos excepcionales en que no sea posible la norma general de retirada inmediata del permiso de conducir (carencia de él, pérdida o sustracción del mismo, ciudadano extranjero residente fuera de España, etc), se hará constar el motivo que impide dicha retirada inmediata, practicándose en todo caso el requerimiento.

En caso de manifestar tenerlo ya previamente retirado por otra autoridad, judicial o administrativa, se procurará detallar al máximo, la autoridad que lo retiene, y la referencia del expediente o procedimiento en el que tiene lugar.

En todo caso se remitirá mandamiento a la jefatura provincial de tráfico para que deje el permiso sin efecto y no expida otro nuevo hasta la extinción de la condena.

En el requerimiento se apercibirá expresamente al penado de que, de incumplir la privación, podrá incurrir en un delito de quebrantamiento de condena.

c. Privación del derecho a la tenencia y porte de armas:

Se hará constar, expresamente, si la licencia de armas se hallaba ya intervenida, como medida cautelar, o si, por el contrario, se procede a su retirada en ese momento. De no constar expresamente en las actuaciones, se le requerirá sobre si dispone o no de armas, dándole, en caso afirmativo, un término no superior a 24 horas para depositarlas en la Intervención de Armas de la Guardia Civil más cercana a su domicilio, entregándole al efecto copia del requerimiento.

En el requerimiento se apercibirá expresamente al penado de que, de incumplir la privación, podrá incurrir en un delito de quebrantamiento de condena.

d. Prohibiciones de acercamiento y comunicación:

En el requerimiento deberá constar de manera expresa la identidad de la persona o personas a las cuales no puede acercarse la persona condenada, o la dirección del domicilio al que se refiere la prohibición, así como la distancia mínima a respetar. Se indicará asimismo que, en su caso la prohibición de comunicación es por cualquier medio o procedimiento.

En el requerimiento se apercibirá expresamente al penado de que, de incumplir la prohibición o prohibiciones, podrá incurrir en un delito de quebrantamiento de condena.

e. Trabajos en beneficio de la comunidad:

Dado que se trata de una pena en cuya ejecución interviene de forma activa y determinante la administración penitenciaria, el requerimiento se limitará a ordenar a la persona condenada a acudir ante el Servicio de Gestión de Penas correspondiente a su domicilio cuando sea citado por correo en el domicilio aportado, todo ello bajo apercibimiento de poder incurrir en un delito de desobediencia y o de quebrantamiento de condena.

3.- Notificaciones de suspensiones y sustituciones de penas privativas de libertad.

El vigente Código Penal derogó, de manera expresa, la Ley de 1908 de Condena Condicional que exigía la notificación mediante acta y con presencia judicial. Al no haberse establecido una previsión expresa al respecto, hay que entender que la notificación de las suspensiones de ejecución de las penas deberá efectuarse mediante una simple diligencia de notificación. Al realizar la referida notificación, los Secretarios judiciales:

1. Harán constar, de manera expresa, en la notificación el plazo de la suspensión.

Igualmente harán a la persona condenada el apercibimiento de revocación de la suspensión, en el caso de comisión de un nuevo delito en el plazo de la suspensión.

2. En los supuestos de diligencias urgentes en las que se acuerde la suspensión condicionada al cumplimiento del compromiso de pago de la responsabilidad civil, en la notificación se indicará, de manera expresa, el plazo concedido por el Juez/Magistrado para el pago de la responsabilidad civil, así como el apercibimiento de posibilidad de revocación de la suspensión en caso de incumplimiento de dicho compromiso (Art. 801 LECrm).

3. En los supuestos de diligencias urgentes en las que se acuerde la suspensión condicionada al cumplimiento del compromiso de aportación de la certificación de hallarse rehabilitado o sometido a tratamiento para la rehabilitación de la adicción a drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en la notificación se indicará, de manera expresa, el plazo concedido por el Juez/Magistrado para la aportación de dicha certificación, así como el apercibimiento de posibilidad de revocación de la suspensión en caso de incumplimiento de dicho compromiso (artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

4. Cuando la suspensión de la ejecución se acuerde, en procedimientos relacionados con la violencia sobre la mujer, condicionada al cumplimiento de las prohibiciones de acercamiento y de comunicación, y al sometimiento a actividades formativas de reeducación (Art. 83.1, último párrafo del Código Penal), en la notificación se deberá indicar, de manera expresa, el condicionamiento de la suspensión a las referidas obligaciones, el plazo por el que se imponen las mismas, así como la necesaria revocación de la suspensión en caso de incumplimiento de las mismas (artículo 84.3 del Código Penal).

5. Cuando la suspensión de la ejecución, en procedimientos que no estén relacionados con la violencia doméstica, vaya acompañada de la imposición de cualquiera de los deberes u obligaciones previstos en el artículo 83.1 del código Penal, en la notificación se deberá indicar, de manera expresa, el apercibimiento de que, en caso de incumplimiento de tales obligaciones, se podrá sustituir la regla de conducta por otra distinta, prorrogar el plazo de suspensión, o revocar la suspensión de la ejecución de la pena, si el incumplimiento fuera reiterado (artículo 84.2 del Código Penal).

En caso de haberse acordado la sustitución de la pena, en la notificación realizada a la persona condenada, deberá advertírsele que, en el supuesto de incumplimiento en todo o en parte de la pena sustitutiva, la pena inicialmente impuesta se ejecutará descontando, en su caso, la parte de tiempo a que equivalgan las cuotas satisfechas o los días de trabajos en beneficio de la comunidad (Artículo 88.2 del Código Penal).

4.- Actuación en caso de no funcionamiento de la agenda electrónica.

Cuando, al intentar realizar un Juzgado de Instrucción, el señalamiento del juicio oral de unas Diligencias Urgentes, no resulte posible realizarlo mediante la agenda electrónico, por hallarse temporalmente no operativa, el Secretario Judicial ordenará, si ello fuera posible por el momento en que se produzca dicha incidencia, comunicar con el Juzgado de lo Penal ante el que se pretendía efectuar el señalamiento, para concertar, con el mismo día y hora de señalamiento, extendiendo diligencia acreditativa del resultado de dicha comunicación. Si ello no fuera posible, se comunicará dicho señalamiento, vía fax, al Juzgado Penal correspondiente, para que éste reserve el oportuno espacio temporal en la agenda.

Se recuerda, en todo caso, la obligación de fijar un tiempo prudencial para el señalamiento, en atención a la naturaleza del asunto, al número de acusados, de testigos, y de las restantes pruebas a practicar. Todo ello con la finalidad de evitar perjuicios, demoras y esperas innecesarias a los profesionales, y, especialmente a los ciudadanos que son llamados a declarar, y respecto de los cuales debe buscarse reducir al máximo los tiempos de espera, como indicador de calidad al que debe aspirarse.

Igualmente, los Secretarios Judiciales deberán extremar y ordenar que se extremen las precauciones para asegurarse de que el señalamiento ha quedado registrado de manera efectiva, impidiendo otros señalamientos en la misma franja horaria, para evitar solapamientos de señalamientos que se vienen dando con cierta frecuencia, con la consiguiente molestia para ciudadanos y profesionales que en ellos deban intervenir.

5.- Remisión de las Diligencias Urgentes.

Debe buscarse siempre, y en todo caso, la remisión más rápida y urgente posible de las Diligencias Urgentes al Juzgado de lo Penal enjuiciador. En primer lugar, los Secretarios judiciales adoptarán las previsiones oportunas para que las Diligencias Urgentes sean remitidas tan pronto como queden realizadas las citaciones y otras diligencias indispensables. Además se evitará, en todo caso, la remisión de las mismas por correo ordinario. Los Juzgados de

Instrucción del mismo partido judicial que el órgano enjuiciador, harán entrega directamente de las Diligencias urgentes, en mano. Los restantes Juzgados de Instrucción lo remitirán por mensajería urgente. En todo caso, y respecto de los despachos expedidos por el Juzgado Instructor que requieran contestación, se indicará expresamente que la contestación se deberá remitir al órgano enjuiciador directamente.

Entrada en vigor de esta Instrucción

La presente Instrucción entrará en funcionamiento al siguiente día de su comunicación, vía correo electrónico a los Secretarios Judiciales del Territorio.

Se adjunta modelo de Anexo con datos relativos al procedimiento, piezas y cantidades intervenidas que deberán remitirse debidamente cumplimentado junto con el procedimiento principal por el órgano instructor.

Logroño, a 2 de Julio de 2012.

LA SECRETARIA DE GOBIERNO

Fdo.: María Jesús Escudero Cinca